

Enfoque



Análisis de situación

Año 12, No. 64, 24 de abril de 2019

Breves anotaciones sobre la guerrilla urbana 1981

Por Marta Gutiérrez

Antropóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Colaboradora de El Observador

Introducción

Hace 38 años tuvieron lugar los acontecimientos. Aún no habían nacido siete de cada 10 guatemaltecos. En ese sentido, podría sonar a impostura pretender ocupar el primer plano junto a los personajes de 1981, por mera filiación familiar o política. Desde mi posición, que es la de una persona que se desarrolló en el medio social posterior a los acontecimientos que nos ocupan, y que generacionalmente le tocó participar en el recuento de daños del cuarto intento revolucionario del siglo XX, tengo interés en escribir cómo conocí los hechos concretos que llevaron durante casi 40 días, entre el 8 de julio y el 13 de agosto de 1981, a la desaparición física en la capital guatemalteca de más de un centenar de hombres y mujeres, jóvenes, vitales. No quiero detenerme en los matices de las estrategias guerrilleras ni examinar la naturaleza del aparato estatal que impidió la hazaña, pues es imposible seguir sin cortes el hilo narrativo de los testigos.

El trueno en la ciudad, testimonio de Mario Payeras, responsable militar del frente urbano Otto René Castillo del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), ha sido considerado pionero en cuanto a la crítica y la versión más completa de los hechos proporcionada por los guerrilleros. Las reflexiones acerca del incumplimiento de las normas de seguridad de la vida clandestina, el desdibujamiento de las fronteras entre las masas y los guerrilleros de la ciudad, la dependencia logística de los frentes rurales en

relación con las actividades urbanas, el aparatismo insurgente, la saturación de la infraestructura clandestina de la ciudad, la delación y, en general, la eficiencia del trabajo de inteligencia militar para identificar militantes, casas, vehículos y armas de los revolucionarios, son precisas e inobjectables. Pero curiosamente, insuficientes.

De la lectura del testimonio de Payeras se deduce que la precipitación de las acciones militares en la ciudad fue vista por los combatientes urbanos no solo con optimismo, sino como una necesidad que permitía a los revolucionarios abastecer y sufragar los costos de las hostilidades. En realidad, las acciones contra el Estado guatemalteco se incrementaron especialmente a partir del triunfo de la Revolución nicaragüense el 19 de julio de 1979. Ni el asesinato de Luis Arenas, “El Tigre del Ixcán”, en junio de 1975, ni la toma de la finca Mujuliá en septiembre de 1979 con la que salió a luz pública la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), habrían sido suficientes por sí mismos para que el Estado guatemalteco respondiera con la saña y el aparataje militar que desplegó desde el segundo semestre de 1981.

Por otro lado, el descontento de las capas medias y de la pequeña burguesía con el régimen y el aislamiento internacional del gobierno del general Romeo Lucas García (1978-marzo de 1982), especialmente luego de la quema de la Embajada de España, contribuyó a alimentar

el triunfalismo de los revolucionarios, lo que los llevo a reforzar y ampliar sus actividades logísticas -armas, vehículos, casas-; servicios médicos, talleres -manufactura, documentos, explosivos, imprenta-; y los servicios de información en la ciudad capital. Recurrieron a casas de fachada de familias de capas medias trabajadora o de la pequeña burguesía en zonas exclusivas de la ciudad.

De esta forma, los guerrilleros abandonaron en la práctica las estrategias y las doctrinas de la guerra popular que habían suscrito a principios de la década de 1970 y que les habían servido para cohesionar a las nuevas organizaciones revolucionarias. Con el segundo aniversario de la Revolución nicaragüense y la ofensiva final en El Salvador en 1981, se intensificó la toma de puestos policiales, fincas y haciendas, gobernaciones, alcaldías, ataques a unidades militares para recuperación de armas, barricadas para obstruir las principales rutas comerciales del país, sabotajes al sistema eléctrico y vial, emboscadas, quema de casas patronales, vehículos y plantaciones.

Los revolucionarios más optimistas con un triunfo a corto plazo, pese a la represión y al creciente ambiente de terror, vieron en las huelgas y movilizaciones de los trabajadores agrícolas de 1980, signos preinsurreccionales que hacían factible dar al traste con el régimen del general Lucas García. La contracción, desde finales de 1978, de la actividad reivindicativa obrera de la industria urbana y suburbana parece haberse omitido de los cálculos políticos, o se interpretó como parte de la "inminente" radicalización social en respaldo de los guerrilleros.



El entusiasmo revolucionario impregnaba el alma guerrillera. El Comandante General de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), Gaspar Ilom, por ejemplo, formó su Estado Mayor y dirigió el puesto de mando desde la ciudad. Esa organización alcanzó entonces el mayor apogeo de sus 25 años de existencia con el desarrollo de cuatro frentes rurales a lo largo de la zona montañosa de la Sierra Madre.

Por su parte, Payeras, entonces jefe en funciones del EGP, propició también desde la ciudad la consolidación de unidades militares urbanas de élite y supervisó la creación de nuevos frentes rurales en Huehuetenango -Frente Ernesto Guevara-; y en el altiplano central -Frente Augusto César Sandino-. Con un sentido más agudo de aventura, este último adelantó que era posible liberar las zonas del Quiché y Huehuetenango al noroccidente, asegurando su protección con un cinturón en el resto del altiplano central y Las Verapaces con el Frente Marco Antonio Yon Sosa.

La liberación de territorios, que hasta ese momento seguía siendo un precepto teórico insurgente, se confundió, a mi parecer, con la confianza que los guerrilleros ciudadanos, incluyendo al mando, otorgaron a las sociedades indígenas locales con las que mantenían relaciones de diverso tipo, lo que -no está de más decirlo- tenía lugar con una fuerte mediación de las comunidades eclesiales de base.

En otras palabras, el supuesto apoyo a los guerrilleros que se medía por la recurrencia de sus operaciones militares -secuestros, recuperaciones de armas, sabotajes o propaganda-, formaba parte de un movimiento aún precoz que, para la primera parte de la década de 1980, no contaba con arraigo sociopolítico ni mucho menos militar dentro de las comunidades indígenas, rurales o urbanas. Se confundió el arraigo religioso, la lucha por los derechos gremiales, civiles y políticos de diversidad de actores así como las iniciativas de desarrollo económico cooperativo -lugares del fomento del liderazgo social y político-, con la lógica de la guerra de guerrillas mediante la cual se buscaba en ese entonces, borrar la ignominiosa intervención estadounidense de 1954.

Antecedentes, 1966

La guerrilla urbana de la década de 1980 es hija de Los Bravos o La Resistencia, que era el nombre con que se conocía coloquialmente a los combatientes urbanos de la década de 1960. Se trataba de un destacamento de jóvenes temerarios que no sobrepasaba el medio centenar, provenientes de las capas medias bajas de la ciudad, estudiantes de educación media que encabezaron los levantamientos contra la corrupción y autoritarismo del gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes, influenciados muchos de ellos por los círculos comunistas.

Lo cierto es que, en la llamada Resistencia Urbana había desde muchachos de las barriadas pobres hasta muchachos que hoy día serían considerados lumpen, algunos trabajadores, no muchos, así como jóvenes que acudían a colegios privados de la ciudad.

Aunque el liderazgo, según se deduce de los relatos de la época, estuvo en los oficiales disidentes del Ejército nacional, Luis Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, que entre otros ya habían formado el Movimiento 13 de Noviembre. Lo cierto es que, en la llamada Resistencia Urbana había desde muchachos de las barriadas pobres hasta muchachos que hoy día serían considerados lumpen, algunos trabajadores, no muchos, así como jóvenes que acudían a colegios privados de la ciudad. El libro *Los años de la resistencia* de Miguel Ángel Sandoval (1998), es un conjunto

de semblanzas de algunos de los personajes de la “prehistoria de la guerrilla urbana” en Guatemala.

No es la procedencia social ni tampoco la reseña de las agrupaciones que surgieron por aquellos años lo que me interesa resaltar, pues ya existe literatura especializada, sino cuestionar ¿Cuál era la importancia del combate en las ciudades? Al suscribir la adhesión a la lucha armada como vía para hacer la revolución, la guerrilla enfrentaba retos de orden práctico.

En sus orígenes, los jóvenes oficiales disidentes del Ejército gubernamental eran quienes contaban con la preparación técnica y militar así como con cierta legitimidad social para encabezar aquel empeño. Además de la necesidad de articular un esquema de relaciones internacionales, incluyendo aquellas con la nueva República cubana, era necesario decidir a nombre de quiénes corrían las cuentas de la lucha armada revolucionaria, aunque en 1990 el espectro se amplió a la cooperación con países no socialistas pero solidarios con algunos empeños progresistas en el mundo.

Desde la década 1960, los secuestros con fines políticos sirvieron para el canje de prisioneros y fueron fuente de financiamiento. César Montes escribió en sus memorias que se consideraba mercenario recibir dinero del exterior, pero testimonios anónimos más reposados aseguran que la ayuda, por ejemplo, desde Moscú, era excesivamente burocrática, y hasta insignificante en esa década, mientras que Cuba se convertía en el centro de los debates revolucionarios del continente. Al respecto, hay literatura en la que protagonistas de la época narran sus experiencias cubanas.

Un dato casi etnográfico en el que parece haber consenso entre los testimoniantes de la época, es que el afán revolucionario inició en la capital, desde donde se desplazó a ritmos diferenciados al resto del país. Desde este punto de vista, la actividad guerrillera urbana de los años 80 retornó proveniente del campo al considerarse en los procesos de revisión y adecuación de la estrategia que la actividad urbana era complementaria de la de los frentes rurales. De la lectura del *Documento de Marzo* (EGP, 1967) y de *La Historia de Nuestra Organización* (ORPA, 1979), se colige que existía, dentro de las organizaciones guerrilleras de entonces, cierta percepción sobre la composición social urbana de los trabajadores y las clases medias.

Se consideraba, según esto, que eran segmentos sociales tendientes “al reformismo, economicismo y al aburguesamiento”, además de encontrarse mucho menos propensos que los indígenas, por ejemplo, a los sacrificios de la confrontación abierta. La ORPA, por ejemplo, llamaba a un proceso de aculturación de la guerrilla con respecto del “pueblo natural” o indígena, y en el documento *La pequeña burguesía, sus limitaciones y lastres* (1975), propuso que aquellos impedimentos eran superables mediante el “desclasamiento” o el “suicidio de clase”.

Esta temática ya formaba parte de las discusiones en el seno de los movimientos socialistas

latinoamericanos, y para el caso de Guatemala, más adelante se anotarán sus implicaciones prácticas que ayudaron a que los guerrilleros desdeñaran hasta cierto punto, las reivindicaciones populares cuya temporalidad de largo plazo, contrastaba con las urgencias de la lucha armada.

Pero como se podrá observar en los hechos que a continuación se presentan, estas interpretaciones desfavorecieron la construcción de los procesos intelectuales que aglutinaron a los núcleos de combatientes urbanos de la época. Aunque se consideró la actividad urbana complementaria de la de los frentes rurales donde la guerrilla se había fortalecido en la última década, en la ciudad se concentró la logística, las armas, las llamadas casas de seguridad, los vehículos, la información, los documentos, los militantes. Aun así, la ciudad no podía ser considerada una retaguardia, no solo porque carecía de lo que los guerrilleros llamaron “bases de apoyo” o “resistencia” sino porque se asentaba en un territorio adverso, con fuerte presencia enemiga.

Los hechos

Las dos organizaciones guerrilleras con mayor infraestructura militar en la ciudad eran ORPA y EGP. Ya se apuntó que en 1981 sus jefes dirigían la lucha armada desde la ciudad. La inteligencia militar gubernamental, después de controlar las huelgas sindicales de la ciudad y el campo así como las protestas estudiantiles entre 1978 y 1980, procedió a confrontar abiertamente a las guerrillas urbanas.



Por tradición, desde 1944, los sectores populares y de los trabajadores en Guatemala han celebrado con manifestaciones callejeras el 1° de Mayo -Día del Trabajo- y el 20 de Octubre -Día de la Revolución-, sin embargo, la marcha del Día del Trabajo de 1981 había dejado de ser masiva. Participaron a lo sumo unas tres mil personas que, por lo regular, se embozaban con pañuelos o se cubrían con gorras. El ambiente era de terror y confrontación. La lucha reivindicativa sindical y estudiantil había mermado considerablemente en relación con 1978.

Si los guerrilleros hubieran interpretado este dato etnográfico habrían admitido la contracción reivindicativa en las calles, las fábricas y centros estudiantiles. Por el contrario, las interpretaciones sobre el desempeño y situación de los trabajadores que sobrevivían a un plan sistemático de asesinatos y desapariciones, se omitieron de los cálculos políticos -en el caso de ORPA, por ejemplo-. Según el EGP, se trataba de un proceso de “radicalización” de los sectores populares urbanos que estaban dispuestos a incorporarse a las armas, lo que les permitía subjetivamente continuar con el ritmo acelerado de la guerra de guerrillas en la ciudad. Se le recuerda como la “época de oro” de las minas *claymore* que incendiaron artificialmente la ciudad.

El día en que Mario Payeras, a la sazón miembro del directorio del EGP, dio por sentado que había concluido la ofensiva de inteligencia militar contra los combatientes urbanos, el 13 de agosto de 1981, el general Aníbal Guevara renunció al cargo de Ministro de la Defensa y al día siguiente, anunció su candidatura a la Presidencia de la República por el oficialismo. Esto, en parte, dio lugar a interpretaciones fáciles sobre el uso electorero que los militares estaban haciendo de la ofensiva

contra la guerrilla. Aunque eso era exacto, todos los entonces candidatos a la Presidencia de la República se vieron obligados a pronunciarse sobre el tratamiento que darían a la insurgencia armada; el tiempo casi inmediato mostró que el tratamiento a la insurgencia guatemalteca por parte del Ejército había sido sistemático antes y después de las elecciones del 7 de marzo de 1982.

Se conoce, por ejemplo, que desde los primeros días de mayo y junio de 1981, inteligencia militar ya realizaba trabajo sistemático con prisioneros. En junio capturó a activistas del EGP como el ex sacerdote jesuita Eduardo Pellecer Faena y el periodista Mario Solórzano Foppa, entre otros. Tres semanas antes se conoce de capturas de activistas de la ORPA con entrenamiento en Cuba, y algunos que posteriormente se incorporaron a las tareas logísticas de tránsito entre el extranjero y la ciudad.

No está de más decir que además de la ruta usada atravesando países europeos, en esos años en que los traslados eran frecuentes y numerosos, se comenzaron a usar las rutas aéreas vía Centroamérica. Para el efecto, se preparaban perfiles de identidad -mantos y leyendas en los que los protagonistas, con documentación falsa, se veían expuestos al atravesar puestos de control, interrogatorios, retenes y vigilancia. En un traslado de 22 combatientes, la responsable de aquello, por ejemplo, simuló que era un equipo de fútbol con uniformes, y en otra ocasión, los trasladó como miembros de un conjunto marimbístico también con uniformes y la reina respectiva.

Inteligencia militar, vía la Secretaría de Relaciones Públicas del Ejército, se aseguró que lo que sucedía en los asaltos a las casas de la guerrilla fuera trasladado y conocido de forma parcial, por la sociedad guatemalteca con acceso a la televisión, la radio y la prensa escrita.

Inteligencia militar, vía la Secretaría de Relaciones Públicas del Ejército, se aseguró que lo que sucedía en los asaltos a las casas de la guerrilla fuera trasladado y conocido de forma parcial, por la sociedad guatemalteca con acceso a la televisión, la radio y la prensa escrita. Se trataba de propaganda con fines políticos. Tras los reportajes que se leen en la prensa se observa que existe una crónica que el lector desconoce: “se trata del reducto número 18” cuando para el lector es la casa número ocho, por ejemplo. En *El trueno en la ciudad*, de Mario Payeras, se nos muestra que los

guerrilleros intentaron, cotejando información, encontrar la punta del hilo. Esto, al parecer, no siempre fue posible así que habrá que conformarse con aproximaciones parciales.

Desde mi punto de vista, inteligencia militar empezó a golpear por la periferia del aparato guerrillero, suponiendo que el objetivo era detectar a los jefes guerrilleros. Inició el jueves 9 de julio de 1981 con el asalto a los talleres de explosivos de la ORPA ubicado muy cerca del Colegio Americano, en Vista Hermosa III. Los guerrilleros resistieron entre las 11:45 de la mañana y las 15:00 horas cuando cesó el fuego. La casa de dos pisos quedó destruida finalmente por las detonaciones. Después de la intervención de Raúl García Granados y su yerno en ese entonces, Álvaro Arzú Irigoyen, Director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), a las 16:00 se abrió la zona congelada que iniciaba en el Boulevard Vista Hermosa y se permitió la evacuación del personal, estudiantes y pobladores del Colegio Americano, Universidad del Valle, Universidad Rafael Landívar y Universidad Francisco Marroquín.

Después de las 17:00 horas ingresó la prensa y las unidades rutinarias de policía. La prensa informó que “una de las mujeres muertas (...) aún tenía una metralleta con la cual hizo frente a las fuerzas de seguridad”. Todo lo encontrado, incluyendo la propaganda, fue recogido por la Segunda Sección del Estado Mayor del Ejército, que era de donde provenían las órdenes de las acciones que se llevaban a cabo en el lugar.

Por su parte, a la Policía Nacional le correspondió ocuparse de los cadáveres. Uno fue encontrado al costado de la casa, otros cinco en el jardín, incluyendo los de las tres mujeres, y cuatro cadáveres más en un lugar no descrito. A los dos días, durante la demolición de la casa, fueron reportados otros cinco cuerpos. La imprecisión en los datos sobre los muertos hace imposible precisar el número, mucho menos la identidad. Los informes necrófilos de la policía describen cuerpos “completamente destrozados”, “cuerpo mutilado”, “pierna derecha cercenada”, “no tenían el medio cuerpo”. Fueron trasladados al anfiteatro del cementerio La Verbena, inhumados sin identificación.

Una semana antes, en esa fábrica de explosivos se había realizado un encuentro con miembros de otras organizaciones en el que la ORPA, entre otras cosas, mostró la utilización de motores y molinos de nixtamal adaptados cuando los demás seguían usando molinos de mano para la preparación de los explosivos. Payeras descartó que inteligencia militar hubiera recibido información directa de alguien que conociera la casa porque estaban muertos, o bajo control de sus responsables. Eso pudo no ser así. Una de las responsables de la casa donde se encontraban los dos prisioneros que el vocero del Ejército presentó a la prensa el 26 de junio de 1981 -capturados al salir de la casa de la guerrilla, pese al estricto control sobre las entradas y salidas-, ese mismo día de la conferencia de prensa oficial, solo que por la tarde, debía acudir a una cita con el capitán *Abimael*, en la Calzada Aguilar Batres. Ella llegó anticipadamente a la cita, entró a un comedor para tomarse un café, observó a los dos detenidos sentados en otra mesa, en una fracción de minutos se encontraron sus miradas. Un desconocido estaba en otra mesa observando mientras tomaba café con pan. Ella tomó un trago de café, decidió salir, pagó, abandonó el comedor, y al salir observó un carro gris de vidrios polarizados y sin placas.



Cruzó la calzada Aguilar Batres, tomó una camioneta que se dirigía a la universidad y desde ahí vio pasar el vehículo con sus dos compañeros capturados. Casualmente, en el bus encontró a otra compañera que la maquilló para disimular la palidez del miedo, a quien pidió trasladar la información a *Abimael* con el propósito de suspender todos los contactos. Después de cambiar de camioneta urbana una y otra vez, tomó un taxi, se comunicó e informó mediante una clave de bíper a su contacto superior que pudo ser el comandante en jefe.

Al día siguiente, viernes 10 de julio de 1981, tenía lugar otro asalto contra otra de las casas de la guerrilla de la ORPA en la colonia El Carmen, zona 12, muy cerca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se encontraba a cargo del capitán *Abimael* (s), Salomón Dary Mancilla. Él ya había ordenado e iniciado la desocupación de la casa con el traslado de equipo y de algunos activistas de la organización por lo que ese día ya no había tanta gente en la casa.

Al percatarse que era objeto de persecución intentó avisar telefónicamente pero la línea ya había sido bloqueada, y sus residentes no atendieron la orden de desocupar completamente la casa si no se comunicaba él al medio día. Los guerrilleros resistieron la embestida durante casi tres horas desde las tres y media de la tarde. Debido a los disparos hubo un pequeño incendio a causa que el segundo nivel de la residencia era de madera. Al cesar el enfrenamiento y permitir inteligencia militar el ingreso de la prensa, ésta informó que se habían encontrado dos carros y una motocicleta en el garaje que habían quedado inservibles, un vehículo estacionado en la calle, propaganda guerrillera, arsenal de armas -que los reporteros especularon se dirigía para El Salvador, y el que no pudieron observar-.

Por su parte, la policía registró en sus informes que en un primer dormitorio fueron encontrados los cuerpos de tres mujeres de unos 20 años de edad; en el segundo, seis cuerpos en su mayoría de hombres

jóvenes que no sobrepasaban entre los 17 y los 25 años, a excepción de un hombre enfermo de más de 60 años en proceso de recuperación que había sido secuestrado hacía tres días del hospital Hermano Pedro después de ser intervenido quirúrgicamente. En un tercer dormitorio encontraron el cadáver de un joven de unos 25 años y en el corredor que comunicaba los dormitorios a un muchacho de 16 años.

Al siguiente día, 11 de julio, un oficial, por órdenes del Estado Mayor del Ejército, llegó a las nueve de la mañana para sacar de la casa los siguientes objetos: una camilla de metal, dos camas dobles de metal, siete somieres, dos revólver calibre 38 especial, una escopeta calibre 12, una granada, ropa personal, folletos de propaganda, mientras que otros elementos del Ejército en horas de la tarde pasaron recogiendo camas de madera con colchonetas, un sofá y cuatro sillas de madera.

Se sabe por Santiago Santa Cruz *-Insurgentes. Guatemala, la paz arrancada* (2004)-, que una de las muchachas que murió resistiendo ese día fue su hermana *Luisa* (s) o Carlota Ileana, que estaba por cumplir 23 años. Durante las siguientes dos semanas, la prensa escrita dio a conocer el asalto a otras seis casas de la guerrilla en distintas zonas de la ciudad (Oakland, Gerona, Vista Hermosa I y II) en las que no se reportaron enfrentamientos, pero sí la captura de documentos y propaganda. Se informaba que las casas habían sido abandonadas por los guerrilleros, aunque se sabe de varios ataques a casas de la guerrilla en que sus residentes fueron capturados y desaparecidos. En una casa de la ORPA de la zona 3, por ejemplo, la responsable de la residencia observó en la televisión que aparecía únicamente el perro de la casa. Sigilosamente había sido capturado el abuelo con dos nietas cuyo paradero, hasta la fecha, sigue sin conocerse.

Una de esas casas abandonadas por los guerrilleros fue la número 13-65, de la 11 Avenida A, Ciudad Nueva, Zona 2, ocupada el 19 de julio de 1981. La prensa informó escuetamente que no hubo enfrentamiento, encontrándose únicamente equipo de radiocomunicación, armas y municiones, mapas, documentos, propaganda, material de uso personal, que era usada, según se dijo, para retener a personas secuestradas.

Siendo el segundo aniversario de la revolución nicaragüense, la prensa informó con más detalle sobre las actividades que ese día realizaron los guerrilleros en el altiplano central, principalmente sobre la Carretera Interamericana a partir del kilómetro 110.

Siendo el segundo aniversario de la revolución nicaragüense, la prensa informó con más detalle sobre las actividades que ese día realizaron los guerrilleros en el altiplano central, principalmente sobre la Carretera Interamericana a partir del kilómetro 110 con el incendio de una camioneta de los transportes Lima, la detonación de una bomba en la Gobernación de Santa Cruz del Quiché, ataques a las guarniciones policiales de varios pueblos de Chimaltenango, un atentado fatal contra el comandante de las reservas militares de Sololá y miembros de la Policía Militar Ambulante (PMA) así

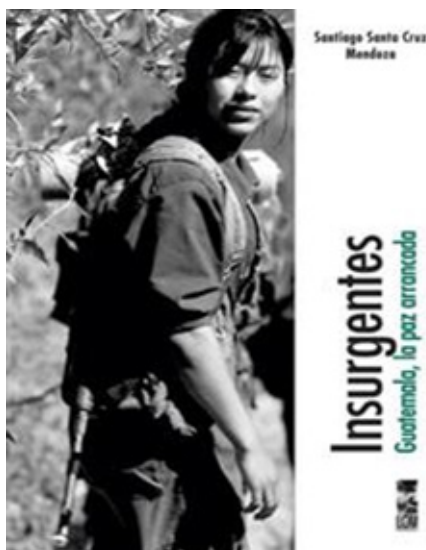
como las tomas de carreteras y fincas en Escuintla, Suchitepéquez, Sacatepéquez y Quetzaltenango.

Pero se sabe de la importancia de la casa de la zona 2 por el testimonio de Mario Payeras. Era la casa de unas de las escuadras de la unidad militar del EGP que hacía apenas dos meses había jurado ahí, ante él y la bandera de Guatemala y del EGP...

...luchar todos los días de la vida y hasta la última gota de su sangre, para tomar el poder y construir en Guatemala una sociedad nueva, una sociedad donde los indios, los ladinos y todos los trabajadores tengan el mismo derecho a participar en la producción y en los beneficios de la riqueza social y de la cultura espiritual.

La casa había sido ocupada por inteligencia militar después de las nueve de la noche del 18 de julio, minutos después que fuera desalojada por los combatientes, dejando armas, equipos y documentos abandonados. Pero inteligencia militar solo procedió a congelar la zona en la madrugada del día 19, evitando el ingreso de vehículos, personas y apostando ametralladoras en las bocacalles de la manzana, ya con fines de propaganda y publicidad. Ese día desapareció Víctor, obrero, mientras participaba en la adecuación de un carro recién recuperado.

Inteligencia militar mantuvo la presión sobre la guerrilla urbana con el asalto al puesto de mando de la ORPA el sábado 25 de julio de 1981. Ahí se encontraba la dirección del Frente Urbano de la organización bajo la dirección del comandante *Antonio* (s). A unas cinco cuadras, de la misma zona exclusiva de la zona 14, pero del otro lado, entre lo que hoy se localiza el edificio de Europlaza y el Hospital Bella Aurora, se encontraba la casa donde residía Gaspar Ilom, máximo jefe de la organización y donde, por lo tanto, se encontraba el puesto de mando en el que había acceso a radio transmisiones. Probablemente no se transmitía, pero sí interceptaban las comunicaciones del Ejército y las policías. A unas dos cuadras de la casa de *Antonio*, informa Payeras, la escuadra de *Agustín*, del EGP, también había recién alquilado otra casa, después de abandonar la residencia de Ciudad Nueva, el 18 de julio.



A las diez de la mañana de ese sábado 25 de julio, la cuadra en que se encontraba la casa número 19-76 de la 2ª calle de la zona 14 estaba sitiada. Los ocho rebeldes no aceptaron la rendición. Resistieron hacia las dos de la tarde. Todos murieron a causa del fuego de artillería. En una parte de la casa se encontraba el cadáver de un hombre y dos mujeres, y en otra habitación otros cuatro cuerpos masculinos y uno femenino, según la versión policial. Se encontró propaganda, imprenta, bombas *claymore*, parque y armas de distinto calibre. Los bomberos trasladaron los cadáveres a la morgue del cementerio La Verbena, que cuatro meses después, algunos fueron reconocidos por sus familiares.

El diario *Impacto* en su versión vespertina de ese sábado, en la primera plana, mostró una foto del comandante *Antonio* muerto, aún con un fusil en la mano. Al día siguiente la campaña de propaganda aseguraba que éste era de origen cubano y que junto a él habían muerto otros dos sacerdotes católicos que eran comandantes de la guerrilla. Interesaba trasladar a la opinión pública sobre la influencia extranjera y el compromiso de la Iglesia católica con la violencia, como lo habían hecho en los primeros días de junio a raíz del secuestro del cura Pellecer Faena.

Efectivamente, ahí estaba el segundo puesto de mando de una de las organizaciones guerrilleras. Pero *Antonio* no era cubano, sino Eduardo Aguilera, docente universitario de la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ingresó a la guerrilla al regresar de sus estudios en Francia a principios de la década de 1970. Junto a él cayó *Tomás o Macho* (s), Horacio Mendizábal García que, siendo médico, había participado en las brigadas internacionalistas durante la insurrección nicaragüense en la que perdió un ojo; *Yambré* (s) o Mireya Cifuentes, maestra graduada del colegio La Asunción que había abandonado sus estudios de derecho para incorporarse a la revolución.

También resistieron dos misioneros laicos católicos, *Miguel* (s) o Raoul Joseph Leger, y *Pedro* (s) o Ángel Martínez Rodrigo, el primero canadiense que colaboraba en la parroquia de Concepción Chiquirichapa, departamento de Quetzaltenango; y el segundo, español, que había trabajado durante más de cinco años en la parroquia de San Miguel Ixtahuacán departamento de San Marcos. Siendo ingeniero agrónomo de profesión, se le recuerda su trabajo en la mejora de la producción agrícola, la promoción de la educación y el deporte entre los niños. En ese momento, ambos estaban lejos de ser comandantes como lo informó la prensa. Eran miembros del equipo de impresión y propaganda. No está de más decir que sobre lo que sucedió ese sábado, el padre de Mireya, Edwin Cifuentes, escribió *El mensaje de alma Cienfuegos*, en versión poética y prosa. Siendo un ejercicio de ficción que traslada una mirada ética y de empatía con la lucha guerrillera de la época.

Los golpes definitivos tras los pasos de los jefes guerrilleros tuvieron lugar entre el 12 y 13 de agosto. El jueves 13 de agosto de 1981, la casa en la que residía dos días antes el jefe de la ORPA, cerca del hospital Bella Aurora, había sido ocupada por inteligencia militar procediendo a un registro minucioso que significó la demolición de la casa.

Los golpes definitivos tras los pasos de los jefes guerrilleros tuvieron lugar entre el 12 y 13 de agosto. El jueves 13 de agosto de 1981, la casa en la que residía dos días antes el jefe de la ORPA, cerca del hospital Bella Aurora, había sido ocupada por inteligencia militar procediendo a un registro minucioso que significó la demolición de la casa. Ese mismo día fueron ocupadas otras cinco casas de la unidad militar del EGP, de las que El trueno en la ciudad muestra un retrato bastante completo de lo que sucedió en esas 48 horas en que los guerrilleros prestaron resistencia al Ejército guatemalteco, a excepción de una casa localizada en Guajitos, zona 21 de la ciudad capital en la que se realizaban actividades relacionadas con labores de

de manufactura de ropa para la guerrilla. Aunque cuatro mujeres de esa familia, *Zoila* (María Victoria Morales Garrido), *Adela* (Cipriana Ramírez), *Cristina*, (Elizabeth Morales Garrido) y su hija de cinco años, *Olga* (Damaris Marleny Oliva Morales), formaban parte de las casas de la unidad militar, ya sea como combatiente o de apoyo. Aunque, Payeras intentó el reconocimiento de los combatientes mediante las fotos presentadas por la prensa. Actualmente casi todos se encuentran desaparecidos, a excepción de *Otoniel* (Ariel González Martínez) que fue reclamado por la familia.

Los episodios aquí presentados parecieran no estar vinculados a la visión victimista con que se ha construido lo que sucedió en las zonas rurales. Y, efectivamente fue así. El ejército atacó a los jefes guerrilleros, los talleres de manufactura, vehículos, explosivos, documentación, arsenal, casas y guerrilleros armados. Éstos tuvieron capacidad de respuesta, aunque combatieron en una situación totalmente desventajosa. Cuando no quedaron bajo escombros, mutilados y hasta irreconocibles, murieron en medio del combate o fueron secuestrados y desaparecidos.

Desde entonces, el mando guerrillero de la ORPA y el EGP fueron forzados a desocupar la ciudad. Los primeros se trasladaron al volcán Tajumulco donde se encontraban sus raíces como agrupación, y ahí sobrevivieron hasta 1996. Pero realizaron al menos dos intentos más por reorganizar su frente urbano. Los segundos también abandonaron la ciudad, hicieron el traslado completo de la organización al altiplano central que, como se sabe, se concentró en Chupol, Quiché, hasta principios de diciembre de 1981 cuando fueron desalojados por el ejército que se ensañó no solo contra la dirección del EGP, que prefería evadir el combate, sino contra las comunidades mayormente quichés y kakchikeles de la región. Para 1982 sobre esa ruta, la Interamericana, la que la guerrilla consideró bajo su control unos meses antes, el ejército deliberadamente tiró cuerpos desmembrados o mutilados de personas desconocidas.

Algunas reflexiones finales

Probablemente, ni el incumplimiento de las normas de seguridad en la vida clandestina, el triunfalismo o entusiasmo guerrillero, la dependencia logística de los frentes rurales respecto de las actividades urbanas o la eficiencia de inteligencia militar, sean suficientes para explicar qué pasó en aquellos años.

Explicaciones de orden estructural pueden ayudar a una comprensión de lo que sucedió. Los guerrilleros, en su misión revolucionaria se encontraban desconectados de las dinámicas territoriales y reivindicativas de la época. Desdeñaron la importancia de los derechos civiles y políticos que reclamaban las fuerzas democráticas de la ciudad y los pueblos, ante todo de las regiones indígenas, la repartición de las tierras que reivindicaban los antiguos y nuevos agraristas, las mejoras salariales de los obreros de la industria urbana, el fortalecimiento de la actividad productiva textil y agrícola entre la naciente burguesía rural o la liberación del trabajo de servidumbre en las fincas cafetaleras de Las Verapaces, entre otros.

Por otro lado, desestimaron la importancia de la configuración de la diversidad cultural y ecológica, o las diferencias sociológicas de una región y otra del país. Los guerrilleros intentaron dar tratamiento diferenciado a los llamados planos, zonas o frentes, pero las homogenizaron en función de la guerra. No obstante, las configuraciones regionales en cuanto a sus dinámicas, actores y lógicas de poder continúan ahí; pese a que el trato favorable a los llamados “inversionistas extranjeros” sigue siendo la columna vertebral sobre la que se toman las decisiones políticas en cuanto a los sistemas de acceso a la tierra, las modalidades del trabajo servil o asalariado, los movimientos migratorios laborales, el acceso a capitales, y las consideraciones de las zonas económicamente marginales, pero que son funcionales al *status quo*.

Esta situación histórica de diferenciación temporal y espacial de las dinámicas socioeconómicas y políticas, en forma de archipiélagos en que se encuentra estructuralmente organizada Guatemala, era imposible de compensar con el sentido voluntarista de los revolucionarios que se autoimpusieron casi como una misión mesiánica, liberar al país de sus males.

La dinámica urbana, centro nervioso del cambio político e institucional y, por lo tanto, foco de la insurrección final, era temporal y espacialmente diferente a los cercanos altiplanos densamente poblados del centro de Guatemala, cuyo epicentro estructurante eran las relaciones verticales con la actividad agroexportadora de la costa sur mezclado con los resabios serviles del trabajo indígena. Eso, sin considerar las zonas montañosas indígenas o zonas de refugio como Los Cuchumatanes, los procesos de colonización y reasentamiento de comunidades en el norte del país, o las dinámicas de las plantaciones bananeras entre el litoral del Pacífico y el Caribe guatemalteco, bajo dominio estadounidense.

Los guerrilleros guatemaltecos, y eso muestran los sucesos acaecidos en 1981 en la ciudad, parecieran haber desdeñado los procesos de formación de las clases en Guatemala y sus imbricaciones, tales como la diversidad territorial definida por los procesos históricos del desarrollo capitalista y la formación del Estado.

No obstante, ninguna historia, incluso la más imparcial y objetiva, podrá dejar de interrogarse sobre quiénes eran aquellos combatientes, mujeres y hombres jóvenes que entregaron su vida por una causa que creyeron justa. Nadie se los pidió, y quizás tampoco nadie se los agradezca. ¿Ingratitud?

Pero no se podrá dejar de invocar su impulso vital o su creencia desinteresada en que el país podía liberarse de los lastres de la desigualdad, la dependencia, el autoritarismo, la corrupción... Con su muerte se cierra un ciclo persistente de la lucha armada que irradió la vida de dos generaciones de revolucionarios guatemaltecos. Aunque la confrontación armada siguió con dramáticos episodios en los frentes rurales en la segunda mitad de los años 1980, también es cierto que la perspectiva había cambiado en función de negociar un programa nacional de reformas legales, institucionales y constitucionales que en sus trazos significativos sigue pendiente.

Bibliografía

Edwin Cifuentes, *El mensaje de alma Cienfuegos*. México: Editoriales Asociados Mexicanos, SA., 1989.

EGP, Documento de marzo, 1967, En: Centro Rolando Morán, *Construyendo caminos, tres documentos históricos del a guerrilla guatemalteca*. Guatemala: Serviprensa, 2008.

Guillermo Paz Cárcamo, *Insurrectos*, Guatemala: Cholsamaj, 2017.

Julio César Macías, *La guerrilla fue mi camino*. Guatemala: Piedra Sana Arandi, 1999.

Mario Payeras, *El trueno en la ciudad*. Guatemala: Ediciones del Pensativo, 2006.

Miguel Ángel Sandoval, *Los años de la resistencia*. Guatemala: Editorial Oscar de León Palacios, 1998.

ORPA, *La pequeña burguesía, sus limitaciones y lastres*. Inédito.

Santiago Santa Cruz, *Insurgentes, Guatemala, la paz arrancada*. Santiago: LOM Ediciones, 2004.

ENFOQUE es una publicación de análisis de situación que es producida por la Asociación El Observador. Forma parte de la iniciativa: “Análisis Alternativo e Independiente para la Construcción de una Sociedad Democrática” con la cual se pretende contribuir en el proceso de construcción de una sociedad más justa y democrática, a través de fortalecer la capacidad para el debate y discusión, el planteamiento, la propuesta y la incidencia política de actores del movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación alternativos y todas aquellas expresiones sociales que actúan en diferentes niveles: local, regional y nacional.

Consejo Editorial

Fernando Solís, Luis Solano, Marco
Fonseca, Rodrigo Batres y Alejandro del Águila.

*Coordinación de información,
análisis y edición:*

Fernando Solís

*12 Calle “A” 3-61 zona 1, Ciudad Capital
Guatemala.
Teléfono: 22 38 27 21*

*Puede descargar esta publicación en nuestra
página web:*

www.elobservadorgt.com

*Si desea contactarnos o comentarnos esta
publicación, escribanos a:*

elobservador2003@gmail.com
